



Consejo de Seguridad

Distr. general
13 de septiembre de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 9 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Me refiero a mi carta de 5 de junio de 2002 (S/2002/634).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido de Lituania el adjunto informe complementario, presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo

Anexo

Carta de fecha 27 de agosto de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente de Lituania ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de presentar las respuestas a la petición del Comité contra el Terrorismo de información adicional en lo que respecta al informe de Lituania sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001) que fue presentado al Comité contra el Terrorismo el 28 de diciembre de 2001 (véase el apéndice).

(*Firmado*) Dr. Gediminas Šerkšnys
Embajador
Representante Permanente

Apéndice

Respuestas a la petición del Comité contra el Terrorismo de información adicional relativa al informe de Lituania sobre la aplicación de la resolución 1373 (2001)*

Apartado a) del párrafo 1

El Banco de Lituania, para proteger los intereses de los depositantes y para garantizar la seguridad, solvencia y estabilidad del banco y del sistema bancario está facultado para imponer a los bancos las siguientes sanciones:

- Prevenir al banco acerca de las deficiencias e infracciones constatadas en sus actividades y fijar un plazo para corregirlas;
- Imponer multas a los jefes de la administración del banco según el procedimiento establecido por la ley;
- Suspender o revocar la licencia de un banco o solamente limitar algunas o todas sus operaciones (moratoria);
- Suspender o revocar la licencia de una sucursal del banco;
- Pedir la remoción de uno o varios miembros del consejo del banco, o del jefe de la administración del banco, y designar a un administrador del banco;
- Pedir la separación de sus cargos de uno o varios miembros del consejo del banco;
- Suspender a uno o varios miembros del consejo del banco; suspender al consejo del banco; separar de sus cargos a los miembros del consejo de administración del banco y al jefe de la administración del banco, y designar un administrador del banco y, de ser necesario, administradores adjuntos;
- Limitar el acceso y utilización de las cuentas mantenidas en el Banco de Lituania; revocar la licencia de un banco.

El Banco de Lituania determinará el tipo de sanciones teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción en razón de la cual se impone la sanción, y el efecto que la infracción y la sanción impuesta tendrán sobre la seguridad, estabilidad y solvencia del banco y del sistema bancario.

El artículo 172–4 del Código de Infracciones Administrativas de la República de Lituania estipula que el suministro de información falsa o el hecho de no proporcionar al Banco de Lituania la información o documentos necesarios para la determinación de la situación financiera y económica de un banco o entidad económica, o para el examen de las operaciones bancarias realizadas, constituyen una violación de la legislación de la República de Lituania, y de otros reglamentos y disposiciones legales del Banco de Lituania que regulan la actividad crediticia, y se sancionará con multa de 10.000 a 50.000 litas (LTL) (un dólar de los EE.UU. equivale aproximadamente a 3,5 litas).

En virtud de la Ley sobre la Prevención del Blanqueo de Dinero, las instituciones crediticias y financieras, lo mismo que los notarios y las autoridades aduaneras, deben: establecer la identidad de sus clientes cuando abran una cuenta o man-

* Los anexos se encuentran disponibles en la Secretaría para su consulta.

tengan con ellos algún otro tipo de relaciones comerciales; comunicar la información sobre la identidad de los clientes al Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) que depende del Ministerio del Interior; comunicar información sobre las transacciones en efectivo sospechosas que pueden guardar relación con una actividad delictiva (incluido el terrorismo); comunicar información sobre todas las transacciones en efectivo superiores a 50.000 LTL o su contravalor en moneda extranjera; comunicar información sobre las operaciones de cambios de divisas en los casos en que el importe en efectivo sea superior a 20.000 LTL, o su contravalor en moneda extranjera, y sobre las transacciones superiores a 50.000 LTL, o su contravalor en moneda extranjera; comunicar información sobre los casos en que personas jurídicas o naturales introduzcan en el país o saquen del país a través de la frontera del Estado sumas en efectivo superiores a 50.000 LTL, o su contravalor en moneda extranjera.

Conforme al artículo 17214 del Código de Infracciones Administrativas, las infracciones de la orden por la que se aplican medidas para prevenir el blanqueo de dinero (incluida la no comunicación de información sobre las transacciones en efectivo) se sancionarán con multa. En los casos en que una persona, sin motivos razonables, no informe en el plazo más breve posible a las autoridades de orden público su conocimiento de que se está preparando, se está cometiendo o se ha cometido un acto de terrorismo, será sancionada en virtud del artículo 294 del Código Penal “No comunicación de un delito” con prisión de hasta dos años y multa, o solamente con multa.

El Banco de Lituania no tiene información sobre la existencia de redes bancarias no oficiales en la República de Lituania. El artículo 3 de la Ley sobre Bancos Comerciales prohíbe dedicarse a actividades bancarias sin licencia del Banco de Lituania. El artículo 42 de la Ley sobre el Banco de Lituania estipula que una institución de crédito es un banco, otra persona jurídica o una sucursal de una institución de crédito extranjera cuyas actividades, conforme a la legislación, se consideran actividades propias de instituciones de crédito y que poseen una licencia o autorización del Banco de Lituania para realizar ciertas operaciones previstas en la legislación. El artículo 43 de la citada Ley estipula la prohibición de dedicarse a las actividades propias de las instituciones de crédito sin licencia o autorización del Banco de Lituania. Las condiciones y los procedimientos para la expedición de licencias y autorizaciones están establecidas por las leyes que regulan el establecimiento y actividades de las instituciones de crédito y por otras leyes de la República de Lituania, así como por los actos legales del Banco de Lituania.

El artículo 306 del Código Penal establece la responsabilidad penal de quienes se dedican a actividades comerciales, económicas, financieras o profesionales en gran escala sin previo establecimiento de una empresa o de otra manera ilícita, o sin tener una licencia (permiso) para dedicarse a tales actividades. Esos actos se sancionarán con prisión de hasta dos años y con multa, o solamente con multa.

Se han redactado enmiendas a la resolución del Gobierno de la República de Lituania y del Consejo de Administración del Banco de Lituania No. 1381/9 “De la aprobación de los criterios para determinar si una operación monetaria es sospecha”, de 11 de diciembre de 1997. El objeto de las enmiendas es ampliar la lista de criterios en que deben basarse las instituciones crediticias y financieras para considerar sospechosas las transacciones en efectivo, poniéndolas inmediatamente en conocimiento del FCIS del Ministerio del Interior. Uno de esos criterios guarda relación directa con la prevención de la financiación del terrorismo y dice así: “Si los datos

que permiten identificar a los clientes o agentes de los clientes” (cuando una transacción en efectivo se realice por medio de un agente), o a los beneficiarios de las transacciones, coinciden con los datos que figuran en las listas comunicadas por los organismos de seguridad de países extranjeros u organizaciones internacionales.

Apartado b) del párrafo 1

El 4 de julio de 2002 el Seimas de la República de Lituania (Parlamento lituano) aprobó la Ley No. IX-1036 que enmendaba el párrafo 1 del artículo 226 y el párrafo 3 del artículo 227 del Código Penal. Esas enmiendas entraron en vigor el 19 de julio de 2002.

Párrafo 1 del artículo 226 del Código Penal. Comunicación de informaciones falsas sobre una amenaza inminente al público, o sobre la materialización de tal amenaza

Una información falsa por medio del teléfono, la radio o cualquier otro medio de comunicación sobre un peligro que amenaza al público, o un importante desastre, que cause una intervención innecesaria de los servicios de emergencia competentes, o siembre la confusión entre el público, será sancionada con prisión de hasta dos años y multa, o con prisión sin multa, o solamente con multa.

Una información falsa por medio del teléfono o de la radio o por cualquier otro medio de comunicación sobre un peligro que amenaza al público, que cause la interrupción de reuniones públicas, o una información falsa sobre una amenaza a la autoridad del Estado o las instituciones administrativas, o a una instalación estratégica, que cause una interrupción de su actividad o daños materiales importantes, será sancionada con prisión de hasta cuatro años.

Párrafo 3) del artículo 227 del Código Penal. Actos de terrorismo

La colocación de explosivos con objeto de causar una explosión, los atentados con bombas o los incendios intencionales, en una vivienda, un lugar de trabajo, un lugar de reuniones públicas o un lugar público, serán sancionadas con prisión de hasta 10 años.

Los mismos actos, cuando causen lesiones a las víctimas, o destrucción o daños a medios de transporte, o a un edificio o al equipo que contiene, serán sancionados con prisión de tres a 12 años.

Cuando una explosión, un incendio intencional o cualquier otra destrucción o daño a un edificio o instalación, ponga en peligro la vida y la salud de un gran número de personas, o la diseminación de sustancias o preparaciones nocivas biológicas, radiactivas o químicas o de microorganismos, serán sancionados con prisión de cinco a 15 años.

Cuando los actos especificados en el párrafo 3 del presente artículo, sean cometidos contra una instalación estratégica o tengan consecuencias graves, serán sancionados con prisión de 10 a 20 años o cadena perpetua.

La creación de un grupo terrorista formado de tres o más personas, o la participación en ese grupo, para cometer un acto terrorista, así como la financiación de ese grupo o la prestación de ayuda de cualquier tipo a ese grupo, serán sancionadas con prisión de cuatro a 10 años.

No se han introducido enmiendas en el artículo 250 del nuevo Código Penal (todavía no está en vigor).

Apartado c) del párrafo 1

Párrafo 1 del artículo 194. Código de Procedimiento Penal de la República de Lituania, sobre la limitación provisional de los derechos de propiedad

Para garantizar el cumplimiento de una demanda civil, la posible confiscación de los bienes, el pago de una multa, sobre la base de los elementos reunidos durante las indagaciones, o de las pruebas en la causa penal, y con razones suficientes para sospechar que el demandado ha obtenido los bienes de manera ilícita y que puede dilapidar, ocultar o enajenar los bienes o el título sobre ellos, el investigador, el interrogador o el fiscal tendrán derecho a limitar provisionalmente los derechos del demandado sobre sus bienes, por una decisión razonada y aprobada por el Fiscal General de la República de Lituania o sus adjuntos, o por los fiscales jefes de las regiones o distritos o sus adjuntos.

La decisión de limitar provisionalmente los derechos de propiedad se notificará a la persona cuyos derechos de propiedad han sido limitados y se inscribirá en el registro de bienes embargados del mismo modo que una decisión de embargo.

Cuando los derechos de propiedad se limiten sobre la base de los elementos reunidos durante las indagaciones, se iniciará un procedimiento penal en el plazo de 15 días a partir del momento en que se tome la decisión de limitar provisionalmente los derechos de propiedad. Si durante la investigación se ordena una comprobación de los documentos, deberá iniciarse un procedimiento penal en el plazo de 15 días a partir de la comunicación de los resultados de la comprobación. Si no se inicia un procedimiento penal dentro de ese plazo, se revocará la limitación provisional de derechos de propiedad.

De conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 195 y los artículos 197 y 198 del presente Código, se establecerá una lista de los bienes objeto de la limitación provisional de derechos de propiedad, y que pasarán bajo el control del investigador, el interrogador o el fiscal.

Cuando se establezca una limitación provisional de derechos de propiedad en relación con activos mantenidos en cuentas de bancos y otras instituciones de crédito, las personas cuyos derechos de propiedad hayan sido limitados provisionalmente sólo tendrán derecho a efectuar, con cargo a dichos activos, las transacciones que se estipulan en la decisión de limitación.

Si se considera que la limitación provisional de los derechos de propiedad ha dejado de ser necesaria, si no se ha iniciado un procedimiento penal o, en todos esos casos, si la limitación excede de seis meses, se revocará por decisión del investigador, el interrogador o el fiscal.

Las personas cuyos derechos de propiedad hayan sido limitados provisionalmente, podrán recurrir contra la decisión ante un fiscal superior en el plazo de cinco días a partir de la recepción de la copia de esa decisión, y a recurrir ante el tribunal contra la decisión del fiscal superior en el plazo de 10 días a partir de su recepción.

Párrafo 2 del artículo 194. Limitación provisional de los derechos de propiedad de las personas de las que se sospeche que poseen bienes adquiridos por medios ilícitos

Para garantizar la ejecución del decomiso de los bienes, sobre la base de los elementos reunidos durante las indagaciones o de las pruebas presentadas en la causa penal, y si hay razones suficientes para sospechar que una persona natural o jurídica ha recibido de otra persona natural o jurídica bienes adquiridos por medios ilícitos, que están sujetos a confiscación conforme al artículo 35 del Código Penal de la República de Lituania, y que puede dilapidar u ocultar esos bienes, transferir los bienes o su titularidad a un tercero, el investigador, el interrogador o el fiscal podrán limitar provisionalmente los derechos de esa persona sobre tales bienes, por decisión razonada del Fiscal General de la República de Lituania o sus adjuntos, o de los fiscales jefes de las regiones o distritos o sus adjuntos.

La decisión de limitar provisionalmente los derechos de propiedad se notificará a la persona cuyos derechos de propiedad hayan sido limitados, y se inscribirá en el registro de bienes embargados de la misma manera que una decisión sobre el embargo de bienes.

Cuando los derechos de propiedad se limiten sobre la base de elementos reunidos durante las indagaciones, deberá iniciarse un procedimiento penal en el plazo de 15 días a partir del momento en que se haya tomado la decisión de limitar provisionalmente los derechos de propiedad. Si se ordena una comprobación de los documentos en el curso de la investigación, deberá iniciarse su procedimiento penal en el plazo de 15 días a partir de la notificación de los resultados de la comprobación. Si no se inicia un procedimiento penal dentro de ese plazo, se revocará la limitación provisional de los derechos de propiedad.

Se establecerá una lista de los bienes objeto de una limitación de derechos de propiedad de conformidad con las disposiciones establecidas en el párrafo 3 del artículo 195 y en los artículos 197 y 198 del presente Código, y dichos bienes se pondrán bajo el control del investigador, el interrogador o el fiscal.

Cuando se decida una limitación provisional de los derechos de propiedad en lo que se refiere a activos mantenidos en cuentas de bancos y otras instituciones de crédito, las personas naturales y jurídicas sólo podrán efectuar con los referidos activos las transacciones que se hayan estipulado en la decisión de limitación de derechos de propiedad.

Si no considera necesario mantener la limitación provisional de los derechos de propiedad, si no se inicia un procedimiento penal o si, en todos esos casos, la limitación excede de un período de seis meses, se revocará por decisión del investigador, el interrogador o el fiscal.

Las personas cuyos derechos de propiedad hayan sido limitados provisionalmente podrán recurrir contra la decisión ante un fiscal superior en el plazo de cinco días a partir de la recepción de la copia de la decisión, y recurrir ante el tribunal contra la decisión del fiscal superior en el plazo de 10 días a partir de su recepción.

Artículo 195. Embargo de bienes

Para garantizar la ejecución de la demanda civil, así como la posible confiscación de los bienes, el investigador deberá embargar los bienes del sospechoso, acusado o persona natural que en virtud de la ley sea materialmente responsable de las acciones de éste, así como los bienes de otras personas que hayan sido recibidos o adquiridos de manera ilícita. El embargo de los bienes podrá realizarse junto con su

incautación o registro, o por separado. Podrán ser embargados los bienes de una persona natural:

- 1) Para garantizar la posible confiscación de los bienes prevista en el artículo 35 del Código Penal;
- 2) Para garantizar la ejecución de una demanda civil cuando haya razones válidas para encausar a una persona jurídica como parte civil en el procedimiento penal.

El embargo de bienes se efectuará en virtud de una decisión razonada de conformidad con las reglas enunciadas en el párrafo 2 del artículo 195. Se establecerá una lista de los bienes objeto de embargo de conformidad con las disposiciones de los artículos 189, 191, 197 y 198 de este Código.

No serán objeto de embargo los bienes que sean indispensables para el sospechoso, el acusado, los miembros de su familia y las personas que dependan de él y que figuren en una lista establecida de conformidad con la legislación de la República de Lituania.

El funcionario que dicte una orden de embargo debe tomar medidas para evitar que del embargo resulten daños a los bienes embargados y para resolver la cuestión de la custodia, administración y utilización de los bienes embargados.

En los casos en que el embargo lleve consigo una limitación total de los derechos de propiedad (que prohíba disponer de esos bienes, utilizarlos o administrarlos), los bienes objeto de embargo se retirarán a su propietario. Los bienes embargados podrán entregarse para su custodia a instituciones del Estado, instituciones municipales, organizaciones de mantenimiento de viviendas o cualquier otra persona que haya firmado la notificación relativa a su responsabilidad en caso de malversación, transferencia u ocultación de los referidos bienes. Cuando la titularidad de los bienes objeto de embargo sea conjunta, sólo podrá embargarse la proporción de los bienes que corresponda a la persona a la que se ha impuesto la restricción del derecho de propiedad. Si no se determina la parte que le corresponde de la propiedad conjunta de los bienes, podrá embargarse temporalmente la totalidad de los bienes hasta que se determine la parte que corresponde a esa persona.

Cuando se embargue un depósito en poder de un banco o de otra institución de crédito, se prohibirá a la persona cuyo depósito se haya embargado la disposición del depósito cuyo importe se especifique en la orden.

Cuando los bienes, materias primas, semimanufacturas y productos listos para su uso que estén en circulación sean objeto de embargo, la persona que administre los bienes podrá modificar su composición y forma, siempre que el valor total no disminuya, a menos que en la orden se indique otra cosa.

El embargo de bienes se revocará por decisión del investigador si la medida deja de ser necesaria.

Apartado d) del párrafo 1

El FCIS del Ministerio del Interior efectúa un análisis de las transacciones en efectivo. Se presta especial atención a determinar si las personas naturales o jurídicas que realizan tales transacciones están o no vinculadas a actividades ilícitas, si la naturaleza y el importe de una transacción en efectivo corresponden al tipo y

magnitud ordinarios de las transacciones de esa persona. Una vez establecido que una transacción en efectivo es sospechosa, o que la persona que la efectúa tiene antecedentes penales o está siendo objeto de una investigación, o que la naturaleza y magnitud de la transacción no corresponde a la actividad regular y pública de la persona interesada, tomando en consideración la posibilidad de que se trate de una primera infracción, se transmitirá toda la información reunida al organismo de seguridad competente para que este prosiga la investigación.

Tras la aprobación el 31 de octubre de 2001 de la resolución No. 1281 del Gobierno, “De las medidas para la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, la División para la Prevención del Blanqueo de Dinero del FCIS, que depende del Ministerio del Interior, empezó a investigar las transacciones financieras sospechosas que pudieran estar vinculadas a la financiación de actividades terroristas. En diversas fases de la investigación se han recibido los servicios de inteligencia financiera de países extranjeros solicitudes para la investigación de 374 personas naturales y 57 empresas y organizaciones vinculadas a actividades terroristas. Se realizó una búsqueda en la base de datos de la División y se enviaron peticiones de información a todos los bancos, a fin de determinar si esas personas eran clientes de instituciones crediticias y financieras y si no realizaban transacciones financieras con clientes de otras instituciones crediticias y financieras que operan en la República de Lituania. Se pidió a los funcionarios de las instituciones crediticias y financieras encargados de la aplicación de las medidas de prevención del blanqueo de dinero que hicieran verificaciones en relación con los clientes y las transacciones de que se trataba y que consideraran sospechosas todas las transacciones futuras de las personas citadas y, de conformidad con el artículo 8 de la Ley sobre la Prevención del Blanqueo de Dinero “Transacciones Monetarias Sospechosas”, informaran inmediatamente al FCIS y del Ministerio del Interior.

Apartado a) del párrafo 2

Está en preparación una ley sobre la lucha contra el terrorismo.

El 15 de enero de 2002 el Parlamento (Seimas) de la República de Lituania aprobó una nueva Ley sobre la fiscalización de armas y municiones (Diario Oficial No. 13-467, 2000) que entrará en vigor el 1º de julio de 2003.

La nueva ley consta de 15 capítulos y 50 artículos. En el capítulo 1 (“Disposiciones generales”) se enuncian las definiciones utilizadas en la ley, así como los objetivos de ésta.

En el capítulo 2 de la ley se efectúa una clasificación detallada de armas y municiones. Las armas se clasifican en cuatro categorías según su grado de peligrosidad: A, B, C y D. La categoría A incluye las armas y municiones más peligrosas; la categoría D, las menos peligrosas.

En el capítulo 3 se definen las armas y municiones prohibidas.

En el capítulo 4 se establece que los datos sobre las armas registradas, sus dueños y encargados habrán de ser transmitidos al Registro de Armas del Estado; y se incluyen además disposiciones sobre la contabilidad de las armas en los registros departamentales de armas y de las armas que se encuentran en manos de civiles.

En el capítulo 5 se incluyen disposiciones sobre la adquisición y posesión de armas y municiones; se define el sujeto del derecho de propiedad de las armas y

municiones, su derecho a adquirir y a tener en su posesión armas y municiones; se estipulan los requisitos para la expedición de permisos, y también se establecen los requisitos que deben cumplir los residentes permanentes de la República de Lituania y las personas registradas legítimamente en la República para adquirir y tener en su posesión ciertas categorías y tipos de armas y municiones; se reglamenta el derecho de los extranjeros a adquirir y tener armas y municiones en su posesión, y también se establecen requisitos para que los extranjeros puedan adquirir ciertas categorías de armas; se define a las personas que pueden usar armas y municiones; se establecen los casos en que pueden imponerse restricciones al derecho de adquirir armas y municiones; y se define a quiénes se considera personas de reputación impecable a las que se otorga el derecho a adquirir armas y municiones.

El capítulo 6 trata de las actividades comerciales vinculadas con las armas y municiones; establece los requisitos generales que deben cumplir las actividades comerciales vinculadas con las armas y municiones; establece restricciones al derecho a trabajar en actividades sujetas a licencia; establece las obligaciones de los titulares de una licencia general; estipula los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas que deseen ocuparse o se ocupen ya de fabricar armas, sus partes principales, y municiones; reglamenta los procedimientos para la exportación, la importación y el transporte de armas y municiones, el comercio y la reparación de armas, la modificación de armas y municiones, la explotación de pabellones y campos de tiro al blanco, y el alquiler de armas.

El capítulo 7 reglamenta las obligaciones de los dueños, titulares y portadores de armas.

El capítulo 8 establece el procedimiento para tener la posesión de armas y municiones, así como para almacenarlas, portarlas y utilizarlas.

La importación y exportación y el transporte de armas y municiones en el territorio de la República de Lituania están reglamentados en el capítulo 9 de la ley.

La nueva ley también establece el procedimiento para mantener colecciones de armas y municiones; organizar exposiciones; anular permisos para portar y tener la posesión de armas y municiones; confiscar, heredar, donar, vender y destruir armas y municiones.

Las disposiciones finales (capítulo 15) establecen cuáles son las instituciones encargadas de fiscalizar la circulación de armas y municiones. En ellas se prevé asimismo el intercambio de informaciones con los Estados extranjeros sobre la circulación de armas y municiones; se establece la responsabilidad por las violaciones de la circulación de armas y municiones; se definen los casos de aplicación de los acuerdos internacionales; se establece la fecha de entrada en vigor de la ley y la lista de leyes que quedarán derogadas cuando ello suceda.

En el momento actual, y hasta que la nueva ley entre en vigor, las disposiciones básicas que reglamentan la circulación de armas y municiones en la República de Lituania, establecen las bases jurídicas para la actividad de las instituciones estatales que están encargadas de supervisar las armas y municiones, y fijan los requisitos que deben cumplir las personas cuyas actividades se relacionan con las armas y municiones, figuran en la Ley sobre armas y municiones aprobada en 1996.

Dicha ley dispone que los titulares del derecho de propiedad y de posesión sobre las armas y municiones deberán ser ciudadanos de la República de Lituania, personas naturales o personas jurídicas registradas en la República de Lituania. Los ciudadanos de la República de Lituania podrán adquirir, tener en su posesión y portar armas de circulación civil limitada previa expedición de un permiso, de conformidad con el procedimiento establecido por el Gobierno; podrán adquirir, tener en su posesión y portar armas de circulación civil limitada a los efectos de cazar; practicar deportes; defender su seguridad (a título de legítima defensa o de la protección de sus bienes); practicar actividades profesionales; iniciar, almacenar o aumentar una colección de armas que sea posible utilizar; y también con otros fines, siempre que no contravengan las leyes vigentes.

La venta, la fabricación y la reparación de armas, así como la fabricación y la venta de municiones en el territorio de la República de Lituania sólo se permiten previa expedición de una licencia, de conformidad con el procedimiento establecido por el Gobierno. Las empresas que se ocupan de la importación de armas deben tener asimismo una licencia expedida por el Ministerio del Interior.

Los individuos pueden vender las armas que sean de su legítima propiedad por conducto de personas o entidades que tengan el derecho a comercializar armas de ese tipo, pero deben notificar a la institución que ha expedido el permiso, y contar con su autorización antes de hacerlo.

Está prohibida la venta de armas y municiones a personas naturales y jurídicas que carezcan de una licencia para adquirir armas de ese tipo. También está prohibido vender armas que no tengan un número de serie y una señal de identificación o municiones que no tengan una señal estándar de correspondencia.

El Código Penal de la República de Lituania establece la responsabilidad de quienes posean, porten, adquieran, fabriquen o vendan armas y municiones (artículo 234), o armen a grupos de delincuentes (artículo 234); tales actos se incluyen en la categoría de delitos graves. El Código Penal (artículo 235) también establece la responsabilidad de las personas que fabrican armas ilícitamente con ánimo de venderlas, o que las venden, o que llevan consigo armas blancas o silenciosas (espadas, puñales, bayonetas, cuchillos de caza, ballestas) o cualquier otro instrumento u objeto fabricado especialmente o modificado con el fin de quitar la vida a alguien o de causarle lesiones corporales.

En virtud de la Ley sobre el Departamento de Seguridad del Estado y la Ley sobre las actividades secretas, el mencionado Departamento realiza operaciones con el fin de identificar a los miembros de organizaciones terroristas y de impedir que se cometan actos terroristas. Dichas personas están sujetas asimismo a medidas de procedimiento penal.

El Programa nacional de lucha contra el terrorismo entró en vigor el 22 de enero de 2002.

Apartado b) del párrafo 2

La institución que se encarga en la actualidad de alertar anticipadamente a otros Estados es la Dirección Nacional de Interpol de Lituania. Está en vías de crearse una Dirección Europol en Lituania.

Apartado c) del párrafo 2

El Departamento de Migración, que depende del Ministerio del Interior, recibe información sobre personas que han cometido u organizado actos terroristas, o que han ayudado a cometer y organizar esa clase de actos. Los nombres de dichos individuos se inscriben en la lista de extranjeros indeseables a quienes se niega la entrada a la República de Lituania. Con arreglo al inciso 5 del párrafo 1 del artículo 7 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros, se niega a un extranjero la admisión a la República de Lituania si se le ha prohibido la entrada en ella. Por lo tanto, se niega a los terroristas la admisión a la República de Lituania, cualquiera sea su nacionalidad o el lugar en el que hayan cometido el acto terrorista.

Con arreglo al inciso 6 del párrafo 1 del artículo 21 y al inciso 3 del párrafo 1 del artículo 24 de la Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros, se rescinden los permisos de residencia temporales cuando, tras haber cometido un delito punible con la pena de prisión, un extranjero ha cumplido la sentencia o ha sido puesto en libertad condicional en la República de Lituania. Por consiguiente, se rescinden los permisos de residencia de los terroristas, cualquiera sea su nacionalidad o el lugar en el que hayan cometido el acto terrorista.

Apartado e) del párrafo 2

En el artículo 6 del Código Penal actual se establece que los nacionales de Lituania y los apátridas que residen permanentemente en el país son responsables, en virtud de las leyes penales de Lituania, por los delitos que hayan cometido en el extranjero. Por lo tanto, en los casos en que un nacional de Lituania o una persona apátrida que resida permanentemente en el país, cometa un delito en el extranjero, existen fundamentos para solicitar, con arreglo al procedimiento establecido en los acuerdos bilaterales y multilaterales concertados por la República de Lituania o a los que ella haya accedido, que se conceda la extradición de dicha persona a Lituania y se le enjuicie por los delitos que haya cometido. Otras personas pueden ser sometidas a juicio en virtud de las leyes penales lituanas por delitos que hayan cometido en el extranjero, sólo si el acto cometido ha sido tipificado como delito y es punible tanto con arreglo a las leyes del lugar donde se ha cometido el delito, como con arreglo a las leyes penales de la República de Lituania. Al mismo tiempo, cabe señalar que el párrafo 2 del artículo 6 del Código Penal establece que en el caso de una persona que cometa un delito en el extranjero o sea enjuiciada en virtud de las leyes penales de Lituania, debe establecerse si no existen diferencias respecto de la pena con arreglo a las leyes de ambos países. En aquellos casos en que las leyes de uno de los países apliquen una pena más leve, la pena que se aplique no debe ser superior a la prevista en la ley más favorable. Con arreglo al párrafo 3 del artículo anterior, una persona que cometa un delito en el extranjero no tiene responsabilidad penal en Lituania si: 1) ha cumplido íntegramente la sentencia impuesta por el tribunal extranjero; 2) ha sido absuelta o exonerada de responsabilidad penal en virtud de un fallo definitivo dictado por un tribunal extranjero, o no se le ha impuesto pena alguna por haber prescrito el delito o por algún otro fundamento jurídico que se haya establecido en el país extranjero.

En principio el párrafo 2 del artículo 6 del Código Penal no impide la aplicación de la jurisdicción universal, en virtud de la cual todos los Estados pueden enjuiciar a los delincuentes que aprehendan, con independencia del lugar en que

hayan cometido el delito. La aplicación de ese principio se vincula con acuerdos internacionales.

Apartado f) del párrafo 2

A continuación figura una lista de los acuerdos internacionales vigentes (8) en los que es parte la República de Lituania. En ellos se establece tanto la asistencia jurídica mutua como la extradición:

- Acuerdo entre la República de Lituania y la República de Belarús sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales;
- Acuerdo entre la República de Lituania y la República de Polonia sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales;
- Acuerdo entre la República de Lituania, la República de Estonia y la República de Letonia sobre asistencia y relaciones jurídicas;
- Acuerdo entre la República de Lituania y Ucrania sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales;
- Acuerdo entre la República de Lituania y la República de Moldova sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales;
- Acuerdo entre la República de Lituania y la Federación de Rusia sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales;
- Acuerdo entre la República de Lituania y la República de Uzbekistán sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales;
- Acuerdo entre la República de Lituania y la República de Kazakstán sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales.

El acuerdo entre la República de Lituania y la República Popular de China sobre asistencia jurídica en asuntos civiles y penales, suscrito en el 2000 (que entró en vigor el 19 de enero de 2002) reglamenta la prestación de asistencia jurídica mutua en asuntos penales. El 17 de junio de 2002 se firmó un acuerdo de extradición entre la República de Lituania y la República Popular de China.

El acuerdo entre la República de Lituania y la República de Azerbaiyán sobre asistencia y relaciones jurídicas en asuntos civiles, de familia y penales, suscrito en el 2001 (el acuerdo fue ratificado por el Parlamento (Seimas) de la República de Lituania el 28 de mayo de 2002, pero no ha entrado todavía en vigor), reglamenta la prestación de asistencia jurídica mutua en asuntos penales y prevé la extradición.

El acuerdo suscrito en 1998 entre la República de Lituania y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua en asuntos penales (que entró en vigor el 26 de agosto de 1999) reglamenta la prestación de esa clase de asistencia. El acuerdo de extradición entre la República de Lituania y el Gobierno de los Estados Unidos de América fue suscrito en el 2001. Aunque fue ratificado por el Seimas de la República de Lituania el 22 de enero de 2002, todavía no ha entrado en vigor, pero se aplica en la práctica por acuerdo entre las partes.

Ni el Código de Procedimiento Penal actualmente en vigor ni el nuevo Código de Procedimiento Penal aprobado el 14 de marzo de 2002 (que todavía no ha entrado en vigor), establecen el plazo dentro del cual Lituania está obligada a cumplir los pedidos de asistencia judicial formulados por instituciones competentes de países

extranjeros. En la práctica esos pedidos de tribunales extranjeros se cumplen en Lituania en un plazo medio de un mes.

Apartado g) del párrafo 2

El 30 de mayo de 2002 el Seimas de la República de Lituania aprobó la decisión No. IX-911, en virtud de la cual aprobó el Programa para el desarrollo del sistema de protección de la frontera del Estado. Dicho Programa tiene los siguientes objetivos: garantizar el régimen jurídico de la frontera del Estado y la zona fronteriza; poner en práctica los requisitos vinculados con la integración en la Unión Europea; asegurar un estado de preparación constante para neutralizar los factores externos de riesgo y las posibles amenazas a la frontera que estén condicionadas por el ambiente geopolítico y que pudieran representar una amenaza para la seguridad nacional de Lituania.

Teniendo presente la futura calidad de miembro de la Unión Europea de Lituania, la frontera terrestre de la República con otros Estados que son candidatos a transformarse en miembros de la Unión Europea se considera la futura frontera interna de la Unión Europea (en adelante, futura frontera interna). La frontera terrestre con otros Estados y la frontera marítima son consideradas la futura frontera externa de la Unión Europea (en adelante, futura frontera externa). La dirección prioritaria en que se desarrollará el sistema de protección de la frontera estatal consiste en fortalecer la protección de la futura frontera externa.

Se ha previsto aplicar en la práctica los requisitos del Acuerdo de Schengen respecto del control de las fronteras externas. Ello significa fundamentalmente impedir el cruce no autorizado de la frontera y garantizar la vigilancia de la frontera terrestre con la República de Belarús y las fronteras terrestre y marítima con la Federación de Rusia.

Se proyecta asegurar el uso más eficaz del equipo adquirido (instalado), intensificar las patrullas móviles, y aumentar la capacidad de reacción rápida a los acontecimientos que tengan lugar en la frontera. En ese sentido, se proyecta establecer y demarcar la zona de protección de la frontera terrestre; establecer un procedimiento para expedir permisos a los efectos de permanecer dentro de dicha zona; construir caminos de patrulla a lo largo de la frontera; instalar puestos de guardia fronteriza en aquellos lugares en los que se cometa el mayor número de violaciones; erigir barreras; instalar equipo de vigilancia y sistemas de alarma en el perímetro de la zona; emplear equipo móvil termovisual y aeronaves. También se proyecta utilizar perros con mayor frecuencia durante las patrullas.

Está en vías de instalación un sistema de comunicaciones mediante computadora y radio para asegurar una vigilancia eficaz.

A fin de asegurar la detección, el reconocimiento y la vigilancia de todos los objetos que se encuentren en el mar territorial y las aguas circundantes durante las 24 horas del día y en todas las condiciones climáticas, se proyecta hacer un uso más amplio de la vigilancia naval y costera y de la infraestructura de otras instituciones y entidades económicas.

Se perfeccionará el sistema actual de información. Se instalará equipo moderno de vigilancia, detección de documentos falsificados y detección de radiaciones. Se proyecta asimismo introducir tecnologías que regulen las corrientes de tránsito en los puntos de cruce de la frontera e impidan que sea posible eludir los puestos de

control o evadir los controles fronterizos de alguna otra manera; tales medidas garantizarán la aplicación de normas internacionales relativas a los controles fronterizos de personas y del transporte en la frontera del Estado.

Apartado d) del párrafo 3

El 14 de junio del presente año el Ministerio de Justicia, de conformidad con las normas de procedimiento aprobadas por el Gobierno, presentó a éste los proyectos de ley necesarios para ratificar la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, de 1973. El 2 de julio de 2002 el Ministerio de Transporte, también de conformidad con las mencionadas normas, presentó al Gobierno los proyectos de ley necesarios para ratificar el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, de 1988 y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, también de 1988. Puesto que algunos de los actos a que se hace referencia en el Convenio y el Protocolo mencionados no han sido tipificados como delitos en el Código Penal, será necesario preparar en lo inmediato un proyecto de ley que enmiende dicho Código. Cabe además señalar que en la actualidad se dispone de una traducción auténtica al idioma lituano del Convenio internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo. Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha comenzado a examinar la legislación nacional vigente para determinar en qué medida cumple con las disposiciones del referido Convenio. Dicho análisis permitirá decidir si es necesario introducir cambios y enmiendas en la legislación vigente de la República de Lituania. El análisis ayudará también a aclarar la cuestión del plazo que haya de establecerse para ratificar el Convenio.

Apartado e) del párrafo 3

Los acuerdos bilaterales sobre asistencia jurídica que han sido concertados por la República de Lituania y que incluyen disposiciones sobre extradición, no precisan cuáles son concretamente los delitos que pueden dar lugar a ésta. En virtud de esos acuerdos, se concede la extradición de personas que han cometido actos tipificados como delitos con arreglo a las leyes de ambas partes y punibles con la privación de libertad por un período superior a un año (o superior a seis meses en algunos casos), o con una pena más severa. Así pues, los acuerdos vinculan la posibilidad de conceder la extradición con la tipificación como delito y con el hecho de que ciertos actos sean punibles con la privación de libertad en virtud de las leyes de ambos Estados, en lugar de vincularla con un tipo de delito determinado. Además, teniendo en cuenta las disposiciones de los acuerdos sobre asistencia jurídica mutua anteriormente mencionados y el hecho de que, con arreglo al Código Penal, un acto terrorista se castiga con penas mucho más severas que la privación de libertad por un período de un año, es posible llegar a la conclusión de que los delitos contemplados en los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo están comprendidos en el ámbito de aplicación de los acuerdos de asistencia jurídica mutua en los que es parte la República de Lituania.

El artículo 224 del Código de Procedimiento Penal dispone que en aquellos casos en que, con arreglo a los acuerdos internacionales en los que sea parte la República de Lituania, haya motivos para conceder la extradición, un fiscal de la Oficina del Fiscal General debe enviar un pedido a tal efecto al Tribunal de Distrito de Vilnius. El juez debe celebrar una audiencia con la participación de la persona

respecto de la cual se ha solicitado la extradición, su abogado defensor y el fiscal, en un plazo de cinco días a partir de la presentación de la solicitud. En aquellos casos en que el juez decida acceder al pedido del fiscal, debe pronunciar un fallo por el que conceda la extradición de la persona de que se trate a las instituciones encargadas de aplicar la ley en otro Estado; mientras que si no accede al pedido, debe dictar un fallo por el cual deniega la extradición a esas instituciones. La persona respecto de la cual se ha dictado el fallo, o su abogado defensor, o el fiscal, tienen derecho a apelar del fallo ante el Tribunal de Apelaciones de Lituania. Un juez del Tribunal de Apelaciones debe escuchar la apelación en un plazo de dos semanas a partir de su presentación. A tales efectos, debe celebrarse una audiencia con la participación de la persona interesada y su abogado defensor, o solamente con la de éste. El fallo que pronuncie el Juez del Tribunal de Apelaciones hará cosa juzgada.

Apartado f) del párrafo 3

Se viene trabajando en la redacción de un nuevo proyecto de ley que combinará las actuales leyes sobre la condición jurídica de los refugiados y sobre la condición jurídica de los extranjeros. En la redacción de la nueva ley se tienen en cuenta los requisitos establecidos en la legislación de la Unión Europea y los convenios internacionales. En ella se establecerán medidas preventivas para garantizar que las personas no hagan uso indebido de su condición de refugiados. Con arreglo a la ley vigente sobre la condición jurídica de los refugiados, el Departamento de Seguridad del Estado investiga a las personas que solicitan asilo para determinar si representan una amenaza para la seguridad del Estado. Si se determina que una persona que ha solicitado asilo representa una amenaza para el Estado, el referido Departamento envía las informaciones pertinentes al Departamento de Migración, el cual depende del Ministerio del Interior, a fin de que no se conceda asilo a esa persona y de que se la deporte.

Apartado g) del párrafo 3

En el párrafo 2 del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal se dispone que no puede concederse la extradición respecto de un ciudadano de la República de Lituania o de un extranjero cuando la persona ha sido enjuiciada por un delito de naturaleza política. Sin embargo, en el párrafo 4 del mismo artículo se dispone que en aquellos casos en que un acuerdo internacional en el que sea parte la República de Lituania, establezca condiciones, fundamentos y procedimientos para conceder la extradición que sean distintos de los previstos en el Código de Procedimiento Penal, prevalecerán las normas del acuerdo internacional. Por consiguiente, el Código se adhiere a uno de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional, cual es el de la precedencia del derecho internacional respecto del derecho interno. El artículo 3 del Convenio europeo sobre extradición de 1957 dispone que si la parte a la cual se le solicita la extradición considera que el delito por el cual ella se solicita tiene carácter político o es un delito vinculado con otro que tiene carácter político, puede negar la extradición. La misma regla se aplica si la parte a la cual se le solicita la extradición tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición aparentemente basada en un delito común se ha hecho en realidad con el propósito de enjuiciar o penar a una persona en razón de su raza, su religión, su nacionalidad o sus opiniones políticas, o para creer que la posición de dicha persona podría verse perjudicada por alguna de esas razones. Por lo tanto, en cada caso

concreto el tribunal debe decidir si el delito de que se trata es o no de naturaleza política, y dictar un fallo apropiado sobre la extradición de la persona.

Cabe señalar que el párrafo 3 del artículo 71 del nuevo Código de Procedimiento Penal aprobado el 14 de marzo de 2002 (que todavía no ha entrado en vigor) dispone que puede no concederse la extradición de un ciudadano de la República de Lituania o de un extranjero (lenguaje similar al que se emplea en el Convenio) si la persona ha sido enjuiciada por un delito de naturaleza política. Dicha norma discrecional del Código de Procedimiento Penal (“puede no concederse la extradición”) significa que aun cuando existan motivos como los mencionados para no conceder la extradición respecto de ciudadanos de la República de Lituania o de países extranjeros, el tribunal, tras examinar las circunstancias, podrá dictar un fallo concediendo la extradición de esas personas a un Estado extranjero. En tal sentido el Código deja al tribunal un amplio margen de discreción.

Párrafo 4

Las instituciones competentes de Lituania vienen ocupándose en forma amplia de las preocupaciones relacionadas con todos los fenómenos enumerados en el párrafo 4, intercambiando informaciones al respecto y participando en el proceso de coordinación.

Otros asuntos

Lituania proporciona los organigramas de sus autoridades policiales y de fiscalización de la migración, y de las entidades aduaneras, impositivas y de supervisión financiera.

Se adjunta al presente informe la traducción de la resolución No. 820 del Gobierno de Lituania relativa a la aplicación de las resoluciones 1388 (2002) y 1390 (2002) del Consejo de Seguridad.
